

autoconstrucción, la regulación del uso del suelo, la densificación de las grandes ciudades, la planificación del transporte urbano y la descontaminación, son materias de una política global y de una gestión descentralizada a cargo de los municipios.

6) Una previsión justa. La definición del sistema previsional futuro debe involucrar a todos los sectores de la vida nacional y definirse tras un amplio debate parlamentario.

La experiencia internacional y el caso chileno demuestra que no todos los trabajadores están en condiciones de ahorrar lo suficiente para asegurar una pensión digna. En consecuencia, es necesario postular un sistema mixto, donde el Estado asuma la pensión de los sectores más pobres y complete el pago de aquellas personas que con su ahorro no alcancen el nivel de pensión digna. El resto de los trabajadores asumirán con su ahorro individual la responsabilidad de asegurar su existencia en su época pasiva a través del mecanismo de las AFP.

El Instituto de Normalización Previsional debería tomar a su cargo el pago de las pensiones de los sectores cuyos ahorros no alcanzarán para financiar la pensión digna. Para ello, al final de su vida activa, el trabajador recibirá el fondo individual acumulado por parte de la AFP correspondiente.

Parece importante mantener el sistema AFP, puesto que asegura que el trabajador se responsabilice de su ahorro, tendiendo a disminuir la evasión, y permite elección manteniendo una homogeneidad fundamental en el sistema. Es necesario, sin embargo, introducir elementos de solidaridad que permitan que la comunidad asuma también la ayuda a los sectores más desvalidos. El restablecimiento de la contribución patronal en un porcentaje del total de la planilla que se transfiera al Instituto de Normalización sería una manera adecuada. Junto a esto, se propone eliminar la cotización fija elevando en una pequeña fracción la comisión proporcional.

Proyectando el monto de pensiones de acuerdo a tasas reales de valorización de la cuenta individual de un 3% (normal en el mundo desarrollado) un porcentaje cercano al 70% de los afiliados al sistema, no alcanzaría a la pensión mínima. En consecuencia, es necesario analizar con realismo las necesidades de financiamiento del sistema, tomando en consideración que en un régimen democrático que pone énfasis en el sector productivo, no será posible asegurar las tasas de rentabilidad de que han disfrutado en estos años los fondos previsionales. Parece conveniente, analizar este tema en conjunto con el de las contribuciones a los diversos sistemas de salud.

El gobierno democrático deberá fomentar el establecimiento de AFP en manos de organizaciones sociales o de los propios

beneficiarios. Las utilidades obtenidas podrían financiar algunas de las actividades de esas organizaciones. Sin perjuicio de que la Superintendencia de AFP mantenga el control estricto que ejerce sobre las administradoras, AFP en manos de organizaciones sociales pueden permitir que montos importantes del ahorro nacional puedan ser asignados con base en la decisión de los trabajadores. Eso puede permitir una cierta democratización y descentralización económica. Al mismo tiempo, es necesario idear un mecanismo para que los beneficiarios participen, no sólo de manera formal en las decisiones fundamentales de las administradoras, particularmente teniendo en cuenta el poder que manejarán esas administradoras al incrementar el número de acciones de empresas en su poder.

Para responder a las necesidades de aumentar la inversión, sin perjuicio de asegurar una rentabilidad adecuada a los fondos, una parte de ellos podría formar parte del Fondo Nacional de Inversión que se destinará a financiar actividades prioritarias, definidas de acuerdo a mecanismos democráticos y claros criterios de eficiencia.

Las AFP deberán incorporar a los cotizantes en su gestión. A su vez, parte de los recursos deberán ser canalizados a un Fondo Nacional de Inversión con participación de trabajadores, empresarios y el Estado.

7) Una educación para la igualdad de oportunidades. La democratización en profundidad del país, sólo se obtendrá a través de la igualdad de oportunidades. La educación cumple un rol primordial. Es indispensable elevar la cobertura de la educación primaria y secundaria, cambiar su orientación y mejorar su calidad. La educación superior deberá fortalecerse y ser la puerta de entrada a la modernización del país, para lo cual la regulación de los planes y programas de universidades públicas y privadas, en función de los requerimientos del desarrollo nacional, es una necesidad fundamental. Un esfuerzo redemocratizador también debe contemplar padres y docentes, la revalorización de la función docente y el carácter integrador de la educación pública, la disminución de las desigualdades en la distribución de los recursos y estímulo a la humanización y adecuación a las innovaciones tecnológicas del sistema educativo.

En síntesis, la propuesta del PPD para pagar la deuda social consiste en la adopción de políticas de carácter estructural y asistencial que se refuercen mutuamente en el contexto de una estrategia de desarrollo equitativo. Con este objetivo, se propone la creación de "círculos virtuosos" entre redistribución y crecimiento en dos campos de acción. Por un lado, la elevación del ingreso de los sectores más pobres derivado de los programas directos fomentará el aumento de la producción de origen nacional y el empleo. Por el otro, el crecimiento de los salarios deberá constituir un estímulo al aumento de la productividad, requisito